



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

BUENOS AIRES, 25 AGO 2011

INFORME TECNICO Nº 032/11.

Ref.: Observaciones sobre la solicitud
de OACDH referida a la efectiva
implementación de la Declaración y el
Plan de Acción de Durban.

La Jefa de la División

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de elevar el presente Informe Técnico relativo a la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) referida a la efectiva implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban.

Se proporcionará información sobre las acciones que se han desarrollado desde esta **Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina**, en el marco de sus competencias, referida a la protección del niño contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y toda otra forma de intolerancia y a la protección de los migrantes, así como también sobre la no discriminación en el ámbito del trabajo.

En primer lugar, es importante señalar que por decreto 1086/05 se aprobó, en 2005, el **Plan Nacional contra la Discriminación**. El plan surgió como consecuencia del compromiso asumido por el Estado argentino en la Tercera Conferencia Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Durban, en 2001, y entiende la no discriminación como la inclusión y la valoración de las diversidades y la igualdad de derecho en el respeto de las diferencias.

El mencionado plan tiene un apartado referido a la niñez y la adolescencia y uno referido a migrantes. En el apartado referido niños se destacan algunos inconvenientes que se vinculan con situaciones de discriminación que sufren los niños en relación con la educación, el trabajo infantil, la violencia; y, en el referido a migrantes, se señalan algunos problemas que sufre la comunidad migrante en la Argentina en relación con la documentación, la educación, el trabajo y la seguridad



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

social, la salud, la seguridad y la vivienda, realizándose en ambos casos propuestas de acción para superarlos.

La Secretaría de Derechos Humanos ha contribuido a su difusión y al asesoramiento para su implementación.

Asimismo, cabe destacar que en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación funciona el **Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)**, que es un organismo descentralizado creado mediante la Ley Nº 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997. Las acciones del INADI están dirigidas "a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminados por su origen étnico o su nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su aspecto físico". La función principal del INADI es garantizar para esas personas los mismos derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, esto es, un trato igualitario.

Dentro del marco normativo vigente en nuestro país referido a la no-discriminación, resulta pertinente mencionar la **Ley 23.592**, sancionada el 23 de agosto de 1988, que penaliza los actos discriminatorios.

Protección de los niños:

En este punto, cabe señalar que Argentina ha presentado su informe periódico al Comité de los Derechos del Niño, en junio de 2010.

Asimismo, el Estado argentino ha apoyado fuertemente la elaboración y aprobación de un Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño que estableciera un procedimiento de comunicaciones individuales. En este sentido, en el 17º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar del 30 de mayo al 17 de junio de 2011, se aprobó el texto del **Protocolo de Comunicaciones Individuales a la Convención de los Derechos del Niño**.

A continuación se detalla la legislación y las buenas prácticas sobre protección de los niños contra el racismo, la discriminación contra el racismo, la discriminación

4



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

En primer lugar, cabe señalar que la Argentina ratificó la **Convención de los Derechos del Niño**, la cual tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional del año 1994 (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).

A nivel normativo en los últimos años se han producido grandes avances en pos de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se expondrán dichas leyes en el orden en que fueron sancionadas

En el año 2005 se sancionó la **Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes** que, en línea con la Convención de los Derechos del Niño, pone énfasis en la consideración del niño y la niña como sujetos plenos de derecho.

Esta Ley en su artículo 28 establece el principio de igualdad y no discriminación, en los siguientes términos: *"Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales."*

Es importante destacar también la sanción en diciembre de 2006 de la **Ley N° 26.206** de Educación Nacional que, entre otras reformas sustantivas, da cumplimiento a trece años de educación obligatoria. Cabe señalar que esta ley fue complementada con la Ley de Financiamiento Educativo, que destina un alto porcentaje de presupuesto nacional.

También fue de gran importancia la sanción en el año 2008 de la **Ley N° 26.364** de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Asimismo, es dable destacar la sanción en junio de 2008, de la **ley 26.388**, que tipifica como delitos, entre otros, la producción, la financiación, el ofrecimiento, la comercialización, la publicación, la facilitación, la distribución o la divulgación de la pornografía infantil; la **ley 26.579**, sancionada en diciembre de 2009, por la cual se establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y la **ley 26.290**, que prevé



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

la incorporación de la cuestión de los derechos del niño en todos los programas de capacitación de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, en junio de 2005 se presentó **el Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes** que es un documento marco de acciones, programas y estrategias que deben asumir y ejecutar los diferentes sectores e instituciones del Estado y de la sociedad civil para lograr el cumplimiento de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la recomendación de "velar por la inscripción de los niños al nacer" (Punto 73) la Secretaría de Derechos Humanos también ha impulsado la sanción de normativa que garantice el derecho a la identidad y la ha difundido activamente. Así, en consonancia con la política de Estado de incentivar y posibilitar el acceso al derecho a la identidad y de asegurar el pleno goce y ejercicio del derecho a la identidad y la identificación de las personas, se dictó la **Ley N° 26.413** de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esta norma establece el plazo de cuarenta días corridos para la inscripción de los nacimientos y dispone que, vencido ese plazo, se procederá a la inscripción de oficio, dentro de los veinte días corridos. También puede destacarse la firma del **decreto 90**, del 2 de febrero de 2009 –prorrogado por el **decreto 92** de 2010–, que dispuso que todos los niños y niñas, desde su nacimiento y hasta los 12 años, podrán obtener en forma gratuita su primer DNI, a través de un procedimiento ágil y sencillo que puede realizarse en cualquier registro civil del país. Con fecha nueve de marzo del corriente año fue publicado en el boletín oficial el decreto **278/2011** que prorroga los otros dos decretos mencionando además que resulta pertinente que los gobiernos provinciales apliquen el régimen administrativo para los ciudadanos mayores de 12 años que carezcan de documento nacional de identidad y que acrediten su pertenencia a algún pueblo originario.

La mencionada ley que remueve los obstáculos para la procedencia de la inscripción de nacimientos, con el fin de salvaguardar el derecho a la identidad de las personas, reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo en los artículos 11 a 13 de la ley 26.061.

Migración:



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

En este punto debe mencionarse que el Estado argentino ratificó en 2007 la **Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares**, instrumento específico y vinculante en la materia cuyo principio rector es el de la no discriminación en el reconocimiento de derechos, independientemente del estatus legal migratorio de la persona.

En el año 2004 fue sancionada la **ley 25.871** de Migraciones. Esta ley obliga al Estado a asegurar en todas sus jurisdicciones, el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

Por su parte, mediante el **decreto 616/2010**, del 3 de mayo de 2010, el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó esta ley y sus modificatorias, en adecuación a los principios internacionalmente reconocidos, con el objetivo de facilitar los trámites que deban realizar los extranjeros que deseen habitar el suelo argentino.

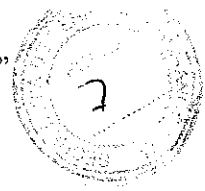
Tanto la ley 25.871 y su reglamentación como la convención obligan al Estado argentino a garantizar integralmente los derechos fundamentales de aquellas personas extranjeras que residen en el territorio argentino y resultan instrumentos valiosos para que los particulares accedan a la protección de sus derechos.

En cuanto a lo que aquí respecta, se transcribe el artículo 6 de la Ley de Migraciones:

"ARTICULO 6° — *El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social".*

Así, la República Argentina ha plasmado un nuevo paradigma en su política migratoria, tanto en lo normativo como en sus programas de regularización de migrantes.

En consonancia con esto, desde la entrada en vigencia de la ley 25.871, el gobierno nacional dispuso la creación e implementación del Programa Nacional de



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

tramitación para acceder a una residencia legal en el país, que implementa un nuevo criterio de radicación, basado en la acreditación de la nacionalidad de uno de los países de la región (Mercosur y Estados asociados) y adopta la buena fe como principio rector. Esto ha sido destacado internacionalmente como ejemplo de una política integral con enfoque de derechos humanos.

Entre las acciones desarrolladas por esta Secretaría que involucran la articulación con otros actores gubernamentales y de la comunidad, a partir de un accidente que pone en evidencia la situación de explotación laboral en talleres textiles de la comunidad boliviana, se destaca la creación, por la resolución 019/06 de la Secretaría de Derechos Humanos, del Observatorio de Derechos Humanos atinente a la Comunidad de Migrantes de origen Boliviano en Argentina. El observatorio creó, a su vez/además, un colectivo integrado por funcionarios provenientes de poderes públicos nacionales, provinciales y municipales, diversas organizaciones sociales y cátedras de universidades nacionales. El objetivo principal fue observar el cumplimiento de los derechos humanos para las personas migrantes de origen boliviano, así como también articular acciones y esfuerzos para prevenir vulneraciones a sus derechos. Esto permitió establecer un contacto estrecho con los integrantes de la comunidad boliviana y sus organizaciones en el país y, al mismo tiempo, generar un diálogo entre los sectores sociales, los organismos de gobierno y los profesionales dedicados a la temática. En este contexto, se realizó un diagnóstico de situación de los niños migrantes respecto del acceso a la salud, su inclusión y permanencia en el sistema educativo y la situación de discriminación que los afecta.

Entre las acciones de promoción y protección de los derechos fundamentales de los migrantes que realiza esta secretaría, se destaca también el Proyecto Binacional (Argentina y Bolivia) "Acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Migrantes Bolivianas", ejecutado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA) de manera articulada con el Ministerio del Interior de la Nación –a través de la Dirección Nacional de Migraciones–, el Ministerio de Salud de la Nación –Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Programa Salud Comunitaria; Área de Comunicación Social de la Subsecretaría de Salud Comunitaria; Programa de Prevención VIH la organización de la sociedad civil Caref (Servicio de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados) y el Ministerio de



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación –a través del Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos–.

Este proyecto forma parte de un acuerdo regional realizado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en 2008, para trabajar en diez países y cinco fronteras de la región sobre acceso a la salud y derechos de mujeres y jóvenes migrantes, a partir de un enfoque que articula actividades binacionales y nacionales. Las líneas de acción sobre las cuales se trabaja son el fortalecimiento de los conocimientos de sus derechos humanos y, en particular, la garantía del acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes.

Empleo:

En lo que respecta al ámbito de trabajo infantil, es importante tener presente que Argentina ratificó en 1996 el **Convenio N° 138**, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y en 2001, el **Convenio N° 182**, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, ambos de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales, a partir de la reforma constitucional del año 1994, se les reconoce jerarquía superior a las leyes

Puntualmente en lo que hace a la erradicación del trabajo infantil, se sancionó la **Ley N° 26.390** sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, sancionada el 4 de junio de 2008, que en forma explícita y taxativa prohíbe el trabajo infantil y que eleva la edad de admisión al empleo a 16 años y a 18 cuando se trate de trabajo peligroso. Esta ley también amplió la protección respecto del trabajo adolescente, basándose en los postulados de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que sostiene la Convención sobre los Derechos del Niño.

Cabe destacar que actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario un proyecto de ley que tipifica como delito del trabajo infantil.

En cuanto a las políticas públicas, cabe mencionar que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación viene desarrollando acciones en pos de la erradicación del trabajo infantil. En la órbita de dicho Ministerio funciona la **Comisión**



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

como función coordinar y articular las acciones tendientes a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Es un organismo tripartito conformado por funcionarios y representantes gubernamentales, representantes sindicales y de organizaciones del sector empresario. En este ámbito se prioriza el seguimiento al cumplimiento del Convenio 182 de la OIT sobre Peores Formas de Trabajo Infantil. Asimismo, en el ámbito provincial existen las Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI). Se realizan Encuentros Nacionales de CONAETI y COPRETI para articular acciones en pos de la erradicación del trabajo infantil.

La Secretaría de Derechos Humanos ha sido designada por la Resolución 222/04 para coordinar las acciones relativas a la aplicación del Convenio 182 en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y para ejercer la representación de este Ministerio ante la CONAETI. La Secretaría ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, que se encuentra en proceso de implementación, con el fin de promover el enfoque de derechos, y en la comisión que elaboró el anteproyecto de ley que eleva la edad mínima de admisión al empleo.

Por otro lado, y dado que la República Argentina ha ratificado el Convenio 182 de la OIT, el Estado está obligado a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir su prohibición y eliminación con carácter de urgencia.

El Ministerio de Trabajo de la Nación, ha iniciado capacitaciones a sus inspectores de trabajo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su función de capacitadora y sensibilizadora, ha realizado talleres a funcionarios, operadores de infancia y agentes comunitarios en general, debido a que son quienes tienen que estar alerta para detectar esta situación e intervenir sin revictimizar nuevamente a los niños, favoreciendo la toma de conciencia de las graves consecuencias que el trabajo infantil ocasiona, para evitar la naturalización o justificación como estrategia de supervivencia familiar o personal. También se han elaborado cartillas de difusión sobre trabajo infantil urbano y rural, trabajo doméstico.

Por otro lado, en lo que hace a la no discriminación en el trabajo, es importante señalar que esta Secretaría representa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el Comité Técnico de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS). En este ámbito, la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad...



*Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos*

para propiciar algunas cuestiones vinculadas a derechos de personas con discapacidad, específicamente, el cumplimiento del cupo laboral del 4 % previsto en la ley 22.431 (art. 8) y la eliminación de las barreras de acceso al entorno físico, la información y las comunicaciones, entre otros (art. 9 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006). En particular, se trabaja para garantizar en las áreas correspondientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, -incluyendo las pertenecientes a esta Secretaría- el cumplimiento del marco normativo vigente.

Elaborado por

Gabriela URTHIAGUE, Asesora jurídica de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad

Supervisado por:

Daniela VETERE, Coordinadora del Programa de Seguimiento de la Implementación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en materia e Niños, Niñas y Adolescentes de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.